

(AFP, UPI, EFE, AP, PL)

100 mil Electricistas Argentinos se Niegan a Cumplir el Nuevo Horario

* Abandonan sus Tareas Cuando Cumplen la Jornada que Tenían Antes de la Nueva Ley

BUENOS AIRES, 2 de febrero.—Los 100 mil trabajadores de electricidad argentinos se rebelaron abiertamente hoy contra el nuevo régimen de trabajo y los mayores horarios que pretendió imponerles el gobierno militar.

Las disposiciones que entraron en vigencia el martes, incluían la participación de la semana de las 36 a 42 horas, la anulación de la participación sindical en la gestión empresaria y de otras cláusulas contenidas en leyes dictadas por el derrocado régimen peronista.

La primera reacción de los trabajadores del sector fue de absoluta rebeldía hacia el nuevo sistema, lo que se expresó en el colectivo abandono de los lugares de labor tras cumplir el horario que regía hasta ayer, martes.

Los trabajadores de las empresas de servicios energéticos, afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza, abandonaron hoy sus tareas en las usinas de la zona ribereña, controladas por los infantes de marina, una vez cumplida la jornada habitual de seis horas y que deben ser de ocho horas, según las nuevas disposiciones.

En la ciudad balnearia de Mar del Plata, 407 kilómetros al sureste de Buenos Aires, las tropas impidieron que los obreros abandonaran las usinas, pero pese a ello no se cumplieron tareas, según se informó. Otro tanto ocurrió en la ciudad de Santa Fe.

En Rosario, la segunda ciudad del país, 312 kilómetros al Noroeste, se produjeron apagones a raíz de desperfectos que fuentes empresarias atribuyen a sabotajes.

Las usinas de Mar del Plata y de San Juan fueron puestas bajo control del Ejército.

Este virtual desconocimiento de las nuevas disposiciones se sumó ahora al "trabajo a tristeza" que los obreros del sector asumieron como actitud de protesta al conocerse la nueva legislación.

Esa modalidad de resistencia consistía en el total retiro de colaboración a las empresas, que trajo aparejado un agravamiento en los cortes de energía eléctrica y una sensible demora en el cumplimiento de las labores habituales.

Ahora, con las medidas de acción directa, el conflicto entró en una escalada cuyas

consecuencias, la mayor parte de los observadores locales coinciden en anunciar como graves.

Se descuenta que en el área de gobierno se estudian las medidas a adoptar ante el abierto desconocimiento de los trabajadores a las normas fijadas por el gobierno militar.

Al respecto se señala que la previsible aplicación de sanciones a los trabajadores no resulta simple de decidir, puesto que la misma podría aparejar una mayor escalada de lucha de los sindicalistas.

Por otra parte, los contactos entre los gremialistas de los sindicatos del área estatal se han intensificado sensiblemente los últimos días.

Aunque la mayor parte de esas organizaciones fueron intervenidas por el Gobierno, los analistas del área coinciden en estimar que la conducción real de los trabajadores sigue en manos de sus antiguos dirigentes.

Estos estarían analizando la posibilidad de extender las medidas de lucha de los electricistas a otras áreas de trabajadores públicos, afectados por los bajos salarios y la posibilidad de despidos masivos, anunciada por el propio gobierno.

Los ferroviarios y los telefónicos, en esta perspectiva, podrían ser los primeros obreros en sumarse al frente sindical rebelde que enfrenta al gobierno militar.

La aplicación de sanciones a los electricistas acentuaría esta posibilidad que, de concretarse, crearía a las autoridades militares argentinas que asumieron el poder político el 24 de marzo de 1976 la mayor crisis desde entonces, aseguraron fuentes sindicales.

BALBIN Y ROBLEDO

El periódico *Adelante*, vocero del radicalismo, la segunda fuerza política del país después del peronismo, cuyo director es el jefe del partido

Ricardo Balbín, dice hoy que "la política del país no se elabora en un recinto cerrado" y reclama un "debate abierto" sobre las "causas del retroceso argentino".

Mientras tanto, el abogado Angel F. Robledo, que fue ministro del Interior durante el gobierno de la presidenta Perón, dijo hoy que se prepara un documento planteando la situación de los presos políticos y gremiales sin causa judicial abierta y la de la ex presidenta, actualmente alojada en una base de la Marina en Azul, 600 kilómetros al suroeste.

Sobre la expresidenta pesados procesos por manejo indebido de fondos públicos. Según Robledo, "el trámite judicial demorará todavía un año más y eso es mucho tiempo".

3 BOMBAS

Una bomba de alto poder estalló hoy frente a un taller mecánico de esta capital donde se reparan vehículos de la Policía Federal y el Ejército.

Según la agencia *Noticias argentinas*, la deflagración provocó grandes daños materiales, pero no se registraron víctimas.

Otro artefacto explosivo estalló frente al domicilio del jefe de vigilancia de la empresa textil "Hilanderías Olmos", en la ciudad de La Plata, mientras un tercero destruyó, en Buenos Aires, el frente de una dependencia de Agua y Energía Eléctrica.

DENUNCIA DE UN DIPUTADO DE ESTADOS UNIDOS

El representante Robert F. Drinnan acusó en Washington, al gobierno argentino de "aparente complicidad" con las escuadras derechistas, a las que atribuyó haber impuesto un clima de terror en ese país.

El legislador demócrata di-

jo a la Cámara que este elemento tendrá que ser tenido en cuenta cuando el congreso debata más adelante las ventas de equipo militares que se contemplan dentro de la ley de asistencia externa.

Drinnan visitó la Argentina a fin de año como miembro de una comisión de la sociedad pro-Derechos Humanos llamada 'Amnistía Internacional'.

"Durante mi visita a la Argentina así como subsecuentemente se me ha destacado la amplia cual sistemática violencia gubernamental. Se han suspendido allí todas las libertades cívicas; los arrestos sin causa son tolerados, y la tortura es rutinaria. Las escuadras derechistas de la muerte operan con impunidad y aparente complicidad del gobierno".

Drinnan dijo que la comisión de la que el formó parte no concluyó aún su informe final sobre la investigación desarrollada en la escena, pero ofreció a la Cámara un sumario de la situación allí contenida en la publicación trimestral de "Amnistía Internacional".

La publicación sostiene que "la Alianza Argentina Anticomunista, la temida Triple A, actúa sin ninguna interferencia policial... Luego del derrocamiento de la presidente Isabel Perón, el general Jorge Videla aseguró a la nación que "para nosotros el respeto de los Derechos Humanos no se basa en un mandato legal o declaraciones internacionales, sino en profundas convicciones cristianas sobre la dignidad del hombre. No obstante esa afirmación, no quedan dudas de que las fuerzas paramilitares de la ultra derecha operan con la connivencia y la colaboración de la policía, de los militares, y de los servicios de Inteligencia".